



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: ÁNGELA PATRICIA RUÍZ
Demandado: COLPENSIONES y GUSTAVO ADOLFO PALACIO
Procedencia: JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 42
Radicado n.º: 05001-31-05-016-2019-00099-01 (O2-22-426)

En Medellín, a los () días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA2011567-2020 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación impetrados por la parte actora y la entidad pública accionada, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de ésta última, dentro del proceso ordinario instaurado por **ÁNGELA PATRICIA RUÍZ** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y de **GUSTAVO ADOLFO PALACIO**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-016-2019-00099-01 (O2-22-426).

Preside la presente, **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en calidad de magistrado ponente. Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a proferir la siguiente SENTENCIA:

ANTECEDENTES

Actuando por intermedio de apoderada judicial la señora **ÁNGELA PATRICIA RUÍZ** instauró demanda ordinaria con la que persigue que se declare que entre el fallecido **ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL** y el señor **GUSTAVO ADOLFO PALACIO** existió un contrato de trabajo desde el 1º de agosto de 2006 hasta el 13 de mayo de 2008, en el cual éste último en calidad de empleador incurrió en mora en el pago de aportes

pensionales, y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes como compañera permanente supérstite del fallecido ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL, junto con los intereses moratorios y las costas procesales, con fundamento en que el señor ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL falleció el 3 de agosto de 2008, con quien convivió permanente y establemente durante más de 20 años y hasta el momento del óbito; que el causante laboró para la empresa GUSTAVO ADOLFO PALACIO desde agosto de 2006 a mayo de 2008 como ayudante de construcción, pero el empleador omitió efectuar los pagos en pensiones, pues únicamente acreditó haberle pagado salud y ARL; que el 13 de mayo de 2009 solicitó al ISS, hoy COLPENSIONES, la pensión de sobrevivientes, misma que fue negada mediante Resolución n.º 20887 del 2009, por no acreditar el afiliado fallecido la densidad mínima de cotizaciones requerida para causar la pensión pretensa, concediéndole en su defecto la indemnización sustitutiva; que inició demanda judicial ante el ISS, hoy COLPENSIONES, la que fue conocida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el que absolvió a la demandada de todas las pretensiones a través de fallo del 11 de noviembre de 2010, confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín mediante sentencia del 30 de abril de 2013, proceso en el que no se tuvo en cuenta el tiempo en mora por parte del empleador; que el 5 de mayo de 2016 solicitó nuevamente la pensión de sobrevivientes, aportando constancias de los pagos del empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO a salud y ARL, la que fue denegada nuevamente por Resolución GNR 171304 del 14 de junio de 2016, negativa reiterada mediante Resolución GNR 277592 del 19 de septiembre de 2016.

La demanda fue admitida mediante auto del 25 de enero de 2017 del Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín (doc. 04), disponiendo su notificación a la parte demandada, aunque con posterioridad, por auto del 14 de febrero de 2019, la juez titular del despacho se declaró impedida para conocer el presente proceso, procediendo con su remisión a la Oficina de Apoyo Judicial para reparto, el que correspondió al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, quien asumió conocimiento del mismo a través de proveído del 27 de marzo de 2019 (doc. 26).

Una vez notificada (doc. 05), COLPENSIONES presentó respuesta a través de apoderada judicial el 27 de febrero de 2017 (doc. 08), con la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones por cuanto el afiliado fallecido no dejó causado el derecho pensional pretense, al tiempo de proponer la excepción previa de cosa juzgada, y las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación por ausencia de requisitos legales para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, compensación

indexada, prescripción, imposibilidad de condena en costas, y descuento del retroactivo por salud.

A su turno, luego de notificado (doc. 16), GUSTAVO ADOLFO PALACIO presentó contestación a la demanda por intermedio de poderhabiente judicial el 11 de octubre de 2017 (doc. 18), a través de la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones toda vez que sí realizó los aportes en pensiones durante la vigencia de la relación laboral con el *de cuius*, a la vez de plantear los medios exceptivos de fondo que intituló: pago de aportes a la seguridad social, cumplimiento de las obligaciones de realizar aportes a la seguridad social, y buena fe.

En la etapa de resolución de excepciones previas de la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPT y la SS, del 10 de septiembre de 2020, el *a quo* resolvió negativamente la excepción de cosa juzgada propuesta oportunamente por COLPENSIONES, con fundamento en que el *sub lite* tiene nuevos hechos, relativos al vínculo laboral del causante y la posible omisión en el pago de las cotizaciones en pensiones, así como existe un nuevo demandado que no fue parte en el proceso radicado 0500131050022010039800, de suyo que no existe identidad de partes ni de *causa petendi* (min. 5:00), decisión frente a la cual el poderhabiente judicial de la entidad pública de seguridad social interpuso el recurso de apelación (min. 6:40), en cuyo sustento indicó que en ambos asuntos se deprecó una pensión de sobrevivientes contra COLPENSIONES por haber sido el causante un afiliado de dicha entidad, por lo que la causa resulta ser la misma, habiéndose discutido en el proceso radicado 0500131050022010039800 el vínculo del causante con el empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO, siendo que la simple vinculación a la causa de éste apenas permitiría que el juicio continuara respecto del mismo, más no frente a COLPENSIONES.

Reposición que fue denegado por el *a quo*, y en subsidio concedió la apelación en el efecto devolutivo (min. 13:00) y continuó con el trámite procesal.

A continuación, (min. 17:00) fijó el litigio en derredor de determinar si el afiliado fallecido dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, si el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO incumplió con sus obligaciones como empleador de cotizar en pensiones, y si COLPENSIONES debe reconocer y pagar la prestación económica pretensa.

Seguidamente, en la etapa de decreto de pruebas, el juzgador de instancia no decretó la prueba solicitada por el apoderado judicial de GUSTAVO ADOLFO PALACIO, consistente en que se oficiara al Banco de Bogotá para verificar el pago de las planillas “PILA” aportadas por su poderdante, decisión frente a la cual el mencionado apoderado judicial interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación (min. 22:00), negando el *a quo* la reposición, habida cuenta que las planillas aportadas eran válidas, pues señalan los meses que está pagando, sin que sea necesario que el banco le dé una validez adicional, y visto que no existe tacha de falsedad sobre los documentos, tal trámite no es necesario. Respecto del recurso de apelación, entendió el *a quo* que no estaba denegando la prueba, sino que se negaba la discusión sobre la validez de la misma, y por tanto no era procedente el recurso de apelación.

A *posteriori*, el apoderado judicial de COLPENSIONES manifestó que desconocía los sellos obrantes en las planillas aportadas, y solicitó que se oficie al Banco de Bogotá para que valide dichos sellos (min. 37:20), a la vez que el apoderado judicial de GUSTAVO ADOLFO PALACIO, desconocimiento que fue denegado por el *a quo* (min. 40:00), decisión frente a la cual el apoderado judicial de COLPENSIONES interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, manifestando que no está proponiendo una tacha de falsedad, sino el desconocimiento de un documento que proviene de un tercero. Procediendo el fallador de instancia a denegar la reposición, por no haberse precisado los documentos sobre los cuáles se efectúa el desconocimiento (min. 50:00), y a denegar la apelación por no tratarse de una denegación probatoria, toda vez que el desconocimiento de documentos no es una prueba. De forma inmediata, el apoderado judicial de COLPENSIONES (min. 54:30), interpuso recurso de reposición y en subsidio el de queja contra la decisión de no conceder la apelación propuesta, debido a que el desconocimiento se tramita como incidente, siendo apelable el auto que deniega o resuelve un incidente; ante lo cual el *a quo* denegó la reposición, y en subsidio concedió la queja, ordenando la remisión al superior funcional.

1.1. DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso fue resuelto en primera instancia mediante sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 (docs. 34 a 36), con la cual el cognoscente de instancia condenó al señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO a cancelar a COLPENSIONES las cotizaciones al sistema general de pensiones causadas a favor del fallecido ORLANDO DE JESÚS SIERRA MUÑOZ por los ciclos de octubre de 2007 y enero y febrero de 2008, con los intereses a la tasa de usura y sobre el SMMLV, al tiempo de condenar a COLPENSIONES

a reconocer y pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes causada por ORLANDO DE JESÚS SIERRA MUÑOZ desde el 5 de mayo de 2013, en cuantía mensual del SMMLV, autorizando a la entidad pública para descontar del retroactivo por pagar los aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud, y el valor indexado de la indemnización sustitutiva reconocida a la demandante, gravando en costas a COLPENSIONES y a GUSTAVO ADOLFO PALACIO a favor de la demandante. Finalmente, dispuso que los recursos de apelación se sustentarán por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes.

Una vez recibidas las apelaciones por escrito (doc. 37 y 38), concedió las mismas por auto del 17 de noviembre de 2020 (doc. 39), luego de lo cual, a través de providencia del 26 de febrero de 2021 la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín declaró la nulidad de dicha actuación, ordenando al *a quo* recibir oralmente en audiencia pública las sustentaciones de las apelaciones y decidir en el mismo acto su concesión (doc. 41). Orden que fue cumplida por el juzgador de instancia en audiencia del 18 de octubre de 2022 (doc. 49).

1.2. APELACIÓN

El fallo de instancia fue recurrido en apelación por la apoderada judicial de la parte actora, únicamente en cuanto no accedió a reconocer de los intereses de mora deprecados, con fundamento en que desde el 5 de octubre del 2015 la demandante solicitó a COLPENSIONES la corrección de historia laboral del causante y seguidamente el 5 de mayo del año 2016 envió nueva solicitud de estudio de la pensión de sobrevivientes, adjuntando los pagos de las cotizaciones en salud del empleador, demostrando que no existía omisión en el pago de aportes, a más de que el 14 de julio de 2016 adjuntó los pagos del empleador a la ARL. Afirma que Colpensiones estaba a cargo de realizar las gestiones de cobro que autoriza la ley, pero nunca las efectuó y se limitó a manifestar que se trataba de una omisión de afiliación, cuando la afiliación estaba suficientemente probada, lo que no puede perjudicar al afiliado.

A su turno, el vocero judicial de COLPENSIONES, apeló la decisión de primera instancia, esgrimiendo al efecto que en el presente caso se configuró la cosa juzgada, toda vez que hay identidad de partes con el proceso radicado 0500131050022010039800, siendo el objeto del debate el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, intereses moratorios y costas procesales, y que si bien en el *sub lite* se demanda adicionalmente a GUSTAVO ADOLFO PALACIO, ello no habilita para que se adelante un nuevo juicio en contra de la

administradora pensional, pues al margen de la pretensiones atinentes a la declaratoria de un vínculo contractual y la supuesta mora de las cotizaciones, ya hubo pronunciamiento judicial declarando que la demandante no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, por lo que no pueden ser nuevamente tramitada tal pretensión. Que no se desplegaron acciones de cobro porque no hubo afiliación y que era carga probatoria de la parte actora demostrar la mora aludida. Resalta que la supuesta mora en las cotizaciones entre los años 2006 y 2008 por parte del empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO son hechos acaecidos con antelación al fallecimiento del causante respecto del proceso 0500131050022010039800, de forma que, no se trata de otros hechos sobrevinientes a la cosa juzgada. Además, asunta que al revisar cada una de las planillas aportadas por el empleador surge cierta duda sobre la autenticidad de los sellos de la entidad financiera, y que tales documentos fueron desconocidos por su representada oportunamente. Aduce que de la prueba testimonial se desprende que el causante trabajó para un señor de nombre JAIRO CORREA durante los 2 años previos a su fallecimiento, lo que determina, a su juicio, que no hubo vínculo laboral con GUSTAVO ADOLFO PALACIO en tal interregno. En adición, alega que la demandante no acreditó haber convivido con el causante ininterrumpidamente durante los 5 años previos a su fallecimiento.

1.3. CONSULTA

Toda vez que la decisión de primera instancia fue desfavorable a los intereses de COLPENSIONES, se analizará igualmente en el grado jurisdiccional de consulta a favor de ésta, en todo lo que no hubiere sido materia de apelación.

1.4. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

En el trámite de segunda instancia, el apoderado judicial de COLPENSIONES arrió escrito contentivo de alegaciones, en el que reiteró sus argumentaciones frente a la cosa juzgada, la falta de afiliación del causante, la inexistencia de vínculo laboral, el desconocimiento de documentos, y la falta de acreditación por la demandante de los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

Por su parte, la gestora judicial de la demandante, solicitó en sede de instancia que se confirme la sentencia de primera instancia en cuanto accedió al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y se modifique en cuanto a la absolución de los intereses moratorios.

ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en segunda instancia y al no observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por COLPENSIONES y por la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del C.P.L. y S.S. se estudiarán únicamente los puntos de disenso materia de la alzada, así como se revisará la sentencia integralmente en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1. PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: ¿si se configuró la cosa juzgada frente al proceso con radicado 0500131050022010039800?, de no ser así, ¿si el decesado ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL, reunió la densidad mínima de cotizaciones requerida para causar la pensión de sobrevivientes?, y de consiguiente, se analizará ¿si la señora ÁNGELA PATRICIA RUÍZ tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente supérstite?, y seguidamente, se estudiará ¿si se causaron los intereses moratorios pretensos?

2.2. TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, no solo respecto de la negativa a reconocer la excepción previa propuesta, sino de la denegación del recurso de apelación contra la decisión de no admitir la petición de desconocimiento de documentos declarativos de terceros, y frente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, habida cuenta que se verificó que el empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO incurrió en mora en el pago de las cotizaciones de julio y agosto de 2006, sin que la entidad accionada demostrara haber ejercido las condignas acciones de cobro, con lo cual el fallecido ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL reunió la densidad mínima cotizacional para causar la pensión de sobrevivientes, conforme pasa a exponerse a continuación.

2.2.1. Excepción previa de cosa juzgada

Las excepciones previas, también conocidas como dilatorias, son aquellas destinadas a sanear el proceso, y por ello, su cometido no es el de cuestionar el fondo del asunto, sino el de mejorar el trámite de la Litis, y así, evitar posibles nulidades, o terminar el proceso cuando no es posible sanearlo, de forma tal que, el legislador previó que debían ser resueltas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio (artículo 32 del CPTSS).

Con relación a la excepción de cosa juzgada, expresamente se estableció que “[e]l juez decidirá las excepciones previas en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. También podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión, y decidir sobre la excepción de cosa juzgada...” (artículo 32 del CPTSS – Subraya intencional de la Sala).

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones adoptadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Esta figura jurídica tiene como función negativa o impeditiva, prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo resuelto y, como positiva o no impeditiva, dotar de seguridad a las relaciones jurídicas y al ordenamiento jurídico (CSJ SL5121-2018, SL1364-2019, SL3649-2021, AL1359-2022). Es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones proferidas en una sentencia, y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes, y definitivas, efectos que se producen por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias, y alcanzar un estado de seguridad jurídica (C-774 de 2001 y C-100 de 2019).

De ahí que, se exhiba como diáfana conclusión, la material y efectiva imposibilidad de las partes y de la comunidad en general, de instaurar nuevamente ante los estrados judiciales el mismo litigio para así salvaguardar y garantizar el principio de la seguridad jurídica que caracteriza la función judicial, imponiéndole la ley el deber al juez al momento que tenga conocimiento de la ocurrencia de esta figura y verificado los requisitos exigidos para tales efectos, de declarar su configuración sin dilación y aun de forma oficiosa.

En esta dirección, según lo dispuesto en el artículo 303 del CGP, la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que

el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior, y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes, por manera que, para que una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere:

- a) Identidad de partes, lo que implica que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión de la que se predica la cosa juzgada, criterio que no debe confundirse con la “identidad de personas”, pues si bien es cierto que el requisito se configura cuando los integrantes de las partes en el nuevo proceso corresponden a las mismas personas que intervinieron en el proceso pretérito, puede suceder que haya cambio de identidad de las personas, mas no alteración de las partes, como sucede cuando en el nuevo proceso intervienen los sucesores mortis causa.
- b) Identidad de objeto, vale decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial respecto de la cual se predica la cosa juzgada; se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado; igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos derivados de un derecho que no fueron materia de declaración expresamente.
- c) Identidad de causa petendi, se presenta cuando entre la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada existen los mismos fundamentos de hecho como sustento, referidos al supuesto fáctico o material que sirve de basamento al derecho reclamado.

Para la Sala, la configuración de la figura de cosa juzgada no exige que las actuaciones cotejadas correspondan a un reflejo exacto o idéntico, pues lo que está llamado a verificarse, es que en efecto se plantee el mismo litigio que fuera desatado por la jurisdicción. Así, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión SL818 de 2021 determinó que *“conviene aclarar que para que en un caso determinado se configuren los elementos axiológicos del instituto procesal de la “cosa juzgada” no es indispensable que todos los hechos de las demandas materia de cotejo sean exactamente los mismos, ni que el conjunto del petitum sea idéntico. La ley procesal no exige para la prosperidad de esta excepción que el segundo proceso sea un calco o copia fidedigna del precedente en los aspectos citados. No. Lo fundamental es que el núcleo de la causa petendi, del objeto y de las pretensiones de ambos procesos evidencien tal identidad esencial que permita inferir al fallador que la segunda acción tiende a replantear la misma cuestión litigiosa, y por ende a revivir un proceso legal y definitivamente fenecido.*

Si se llegase a la afirmación contraria bastaría que después de una sentencia judicial desfavorable la parte perdedora alterase los fundamentos fácticos de la acción desventurada o adicionara pretensiones accesorias con el objeto de enervar los inexorables e indelebles efectos de la cosa juzgada, en una tentativa vana de enmendar los errores que originaron el resultado frustrado.”.

En este sentido, la Sala advierte que entre el *sub lite*, conocido con el radicado único nacional 05001-31-05-016-2019-00099-00, y la anterior litis, conocida con el radicado único nacional 05001-31-05-002-2010-00398-00, no se verifica el cumplimiento de los requisitos anteriormente predicados.

Al punto, sea lo primero indicar que, como bien lo concluyó el *a quo*, no suscita mayor controversia verificar que no existe identidad de las partes entre una y otra litis, en tanto que en el proceso primigenio la señora ÁNGELA PATRICIA RUÍZ funge como extremo demandante y el ISS, hoy COLPENSIONES E.I.C.E. como convocada al juicio, mientras en el *sub lite* la parte pasiva está conformada adicionalmente con GUSTAVO ADOLFO PALACIO.

Ahora, se duele el recurrente que el hecho de que en el *sub studium* figure un nuevo demandado, no es suficiente para que no se configure la cosa juzgada, pues tal efecto impeditivo podría configurarse apenas parcialmente frente a COLPENSIONES. Empero, frente a los elementos restantes de la cosa juzgada la conclusión es la misma, y así refulge de la lectura de los hechos y peticiones en una y otra acción judicial.

Es así que en la demanda prístina, la parte demandante solicitó únicamente el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y los intereses moratorios, la indexación y las costas, atribuyendo entonces como conducta reprochable de la administradora no haber ejercido las acciones de cobro contra los empleadores morosos de forma genérica; mientras que en el *sub examine*, a las claras se muestra que en esta ocasión la parte demandante pretende adicionalmente la declaratoria de contrato de trabajo entre el causante y el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO, y de la mora de éste en el pago de aportes al sistema general de pensiones en el interregno que va del 1º de agosto de 2006 al 13 de mayo de 2008, cuestionándose en los hechos que en dicho lapso el pretendido empleador omitió efectuar los pagos correspondientes.

Aclarado lo anterior, y aun a pesar de los esfuerzos argumentativos de COLPENSIONES para equiparar uno y otro proceso judicial, para la Sala, diáfano se muestra que en una y otra actuación aflora la diferencia de su núcleo litigioso, a saber: en la iniciada en el año 2010 fue el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a partir de que se tuviera en cuenta cualquier periodo en mora que figuraba en la historia laboral, y en el caso de autos la pensión de sobrevivientes a partir de la declaratoria de relación laboral del causante con el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO y su omisión en el pago de aportes en un periodo concreto, lo que de suyo demanda de la jurisdicción examinar hechos no sometidos a su conocimiento en el proceso previo, y termina por derruir el fundamento principal del dislate atribuido por el censor a la providencia confutada, imponiéndose la confirmación de la decisión de primera instancia en cuanto con acierto denegó la excepción previa propuesta.

2.3.2. Recurso de queja

En lo atinente al recurso de queja formulado por el apoderado judicial de COLPENSIONES, frente a la providencia que denegó la apelación interpuesta contra la decisión de no dar trámite a la petición de desconocimiento de documentos, estima pertinente la Sala memorar el contenido del penúltimo inciso del artículo 323 del CGP, según el cual “(...) *La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada, el secretario comunicará inmediatamente este hecho al superior por cualquier medio, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos.*” Ello así, y visto que en el *sub lite* el apoderado judicial de COLPENSIONES interpuso el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ciertamente debe resolverse la queja incoada.

Al efecto, tenemos que el alzadista afirmó que la manifestación de documentos declarativos emanados de terceros se debe resolver mediante incidente, y en esa medida era apelable la decisión del *a quo* de no dar trámite al mismo.

Frente al tema aquí planteado, cumple advertir que en términos del artículo 65 del Estatuto Adjetivo Laboral referido a la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia, en su numeral 5° señala que es apelable el auto que “*que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida.*”.

Punto en derredor del cual ha de memorarse que un incidente es un procedimiento accesorio al proceso, diseñado para tramitar asuntos previamente definidos en la ley,

entonces, dado que el desconocimiento del documento es un asunto incidental que cuenta con un procedimiento especial establecido en el artículo 272 del CGP, se trata de un incidente propuesto por COLPENSIONES, cuya decisión sería apelable.

Definido lo anterior, pasa la Sala a establecer si el desconocimiento de documentos fue formulado atendiendo a los requisitos del artículo 272 del CGP, encontrándose que fue formulado de manera oportuna, toda vez que fue propuesto en la audiencia en la que se dispuso la incorporación de las planillas de pago de aportes en pensiones al proceso, según lo preceptuado por el artículo 269 del CGP. Ahora, los documentos frente a los que se propuso el desconocimiento (doc. 020) si bien se encuentran suscritos por GUSTAVO ADOLFO PALACIO, el punto en el que se desconocen es frente a los sellos de recibido del Banco de Bogotá, de suerte que la parte del documento que se desconoce efectivamente se le atribuye a un tercero; a más de que no se trata de un manuscrito, y ni están firmados por el Banco de Bogotá, por lo que cumplen con las exigencias iniciales del artículo 272 del CGP.

Empero, aunque por otras razones, se estima acertada la decisión del *a quo* de denegar el desconocimiento de documentos, habida cuenta que el artículo 272 del CGP establece que la verificación del documento desconocido se hace “(...) *en la forma establecida para la tacha* (...)”, trámite frente al cual el artículo 269 del CGP dispone que “*No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión*”, siendo que en el caso de marras, como se verá a profundidad más adelante, lo preponderante es probar la afiliación del señor ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL a COLPENSIONES por parte de su empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO, ya que en caso de mora del empleador le correspondía a la administradora de pensiones adelantar las condignas acciones de cobro so pena de validarse el periodo en mora a efectos de causar la pensión de sobrevivientes; sin que planillas de aportes referidas probaren dicha afiliación del trabajador por parte del empleador, en tanto apenas se limitan a probar el pago o no de los aportes cada mes; por lo que deberá confirmarse la decisión del sentenciador de instancia, en tanto denegó el trámite de desconocimiento de documentos propuesto por Colpensiones.

2.2.3. Pensión de sobrevivientes y cotizaciones en mora

Al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 3 de agosto de 2008 (doc. 03 pág. 3), normativa que dispone que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado

fallecido siempre que éste hubiere cotizado por lo menos cincuenta (50) semanas en dentro de los tres años inmediatamente anteriores al momento en que se produzca la muerte.

Para el caso de autos, tenemos que en las resoluciones 20887 de 2009 (doc. 003 pág. 11 y ss.), GNR 171304 del 14 de junio de 2016 (doc. 003 pág.32 y ss.) y GNR 277592 del 19 de julio de 2016 (doc. 003 pág. 49 y ss.), la entidad administradora de pensiones accionada reitera que el difunto ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL reunió en total 43 semanas de cotización en los 3 años inmediatamente anteriores al óbito, a saber, en entre el **4 de agosto de 2005** y el **3 de agosto de 2008**, según se detalla en el siguiente cuadro:

FECHA INICIAL	FECHA FINAL	EMPLEADOR	CLASE	TOTAL DIAS
01/08/2005	22/08/2005	PALACIO GUSTAVO ADOLFO	PRIVADO	22
01/09/2005	01/10/2005	PALACIO GUSTAVO ADOLFO	PRIVADO	31
01/11/2005	01/11/2005	GREGORIO MEDRANO	PRIVADO	1
01/02/2006	21/02/2006	LUIS ALFREDO MAZO ORTIZ	PRIVADO	21
01/03/2006	31/05/2006	LUIS ALFREDO MAZO ORTIZ	PRIVADO	90
01/06/2006	09/06/2006	JOSE ALBEIRO LONDOÑO	PRIVADO	9
01/07/2006	10/07/2006	JOSE ALBEIRO LONDOÑO	PRIVADO	10
01/07/2007	18/07/2007	SEBASTIAN HOLGUIN	PRIVADO	18
01/04/2008	07/04/2008	1 JAIRO ANTONIO CORREA VALENCI	PRIVADO	7
01/05/2008	03/08/2008	1 JAIRO ANTONIO CORREA VALENCI	PRIVADO	93

Por manera que, aun cuando la historia laboral obrante en el plenario (doc. 003 pág. 5 a 7) dé cuenta de apenas 38,85 semanas cotizadas en tal interregno, habrá de atenderse la Sala a lo reiterado por la propia entidad pública accionada en los 3 actos administrativos en cita, pues en los mismos es la propia demandada la que está reconociendo el número de semanas cotizadas por el *de cujus*, sin que se advierta justificación alguna para que en una historia laboral posterior que ni siquiera está suscrita por tal administradora, se indique un número inferior de semanas cotizadas por el lapso en comento.

Siendo el punto neural de la discusión la alegación de la parte actora según la cual deben tenerse en cuenta las semanas de cotización en mora del empleador GUSTAVO ADOFLO PALACIO para el cálculo de su mesada pensional.

En derredor de este punto, vale acotar que el precedente judicial vigente, ordena que *“para efectos de contabilizar las semanas cotizadas por el afiliado a fin de verificar si se cumplen los presupuestos legales tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta no solo las consignadas oportunamente sino las que se encuentran en*

mora de pago por periodos en los que la vigencia de la relación laboral no se discute, y dada la falta de gestión de cobro por parte de la administradora correspondiente” (SL1142-2020, subrayas propias de la Sala), y “que «las cotizaciones de un asegurado al sistema, se generan con ocasión de la prestación efectiva del servicio » de manera que, para que pudiera hablarse de mora patronal, «se requería la existencia de una relación laboral que así la genere, por lo que no puede el operador judicial endilgarle a la administradora de pensiones una responsabilidad automática ante los reportes de falta de pago por parte del empleador reflejados en la historia laboral»(...)” (SL5691-2021).

En igual sentido, ha sostenido la jurisprudencia nacional en sentencia SL5691-2021 que:

“(...) «cuando se ostentan serias dudas acerca de la validez de ciertos períodos, ya sea, por ejemplo, porque existen novedades o inconsistencias en la historia laboral tales como: la falta de afiliación o de retiro, el no registro de la relación laboral o porque no esté muy clara la continuidad o permanencia del afiliado» como es lo que acontece en el presente asunto, «resulta necesario exigir la prueba de la existencia de una relación laboral que le dé soporte efectivo a dichas cotizaciones, aun cuando se registra afiliación pero se registra mora del empleador, para así evitar fraudes al sistema de seguridad social». (CSJ SL3285-2021), debiéndose advertir, que tal y como se resaltó en la sentencia antes citada:

(...) esta exigencia es excepcional y resulta predicable únicamente en los casos en que, como se dijo, existan serias y fundadas dudas sobre la vigencia de un nexo contractual de trabajo, pues no en todos los eventos en que se examine una historia laboral, de cara a efectuar la contabilización de las semanas cotizadas, se debe verificar la existencia de una relación laboral por cada período aportado o dejado de cotizar.

Dicho de otra manera, no puede el juez entrar a convalidar períodos con una aparente falta de relación laboral sin tener la certeza de que en éstos el trabajador prestó sus servicios bajo un vínculo laboral, puesto que, el simple registro de las cotizaciones en la historia laboral no conlleva, de manera automática e inexorable, a tener como efectivamente cotizado esos períodos, dado que ello no solo podría conllevar a cargarle o imputarle al sistema pensional un número de semanas no cotizadas por el asegurado, sino a declarar la existencia de un contrato de trabajo no cumplido, con las consecuencias que ello acarrea; lo que además supone un

claro desconocimiento de un principio medular del ordenamiento jurídico del trabajo, como lo es el de la primacía de la realidad sobre las formas.”

Por consiguiente, si bien en principio deben reconocerse a favor del afiliado las semanas que figuran con mora a cargo del empleador en la historia laboral, lo cierto es que cuando se advierte que el reporte que figure en mora en la historia laboral del afiliado no coincide con la realidad, tiene inconsistencias, o presente cualquier duda sobre la continuidad o la efectiva prestación del servicio por parte del afiliado, el juzgador no debe proceder a contabilizarlo sin mayor análisis, sino que debe ahondar en la recolección de elementos de convicción tendiente a verificar si la presunta mora reflejada en la historia laboral efectivamente corresponde a periodos en los que el afiliado prestó el servicio.

En adición, no puede soslayar esta Sala, que en sentencia SL4103-2017 la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia aquilató que *“si el empleador omiso en la afiliación no realiza el trámite de convalidación de tiempos servidos, antes de la causación del riesgo de muerte, debe asumir el pago de la pensión de sobrevivientes (...)”*, posición reiterada en sentencias SL4698-2020, SL1740-2021 y SL4250-2021. De tal forma que, en todos los casos en que el empleador no haya afiliado al trabajador y, consecuentemente, la administradora de pensiones *“no tuvo conocimiento para iniciar acciones de cobro de los aportes”*, es el empleador y no la administradora de pensiones quien debe asumir la prestación que se hubiere causado.

En derredor de este ítem, ha de partirse del presupuesto según el cual el propio GUSTAVO ADOLFO PALACIO confesó al contestar la demanda que es cierto que el fallecido laboró para él del año 2006 al año 2008 (doc. 018 pág. 2), de donde se sigue que salvo que se hubiere aportado prueba en contrario, no habría duda de la relación laboral que ató a las partes.

En este sentido, alegó el alzadista por pasiva que el hijo del causante, el testigo CRISTIAN CAMILO SIERRA RUÍZ, manifestó que el *de cujus* había laborado para un señor de nombre JAIRO CORREA durante los últimos 2 años de vida. Escuchado el testifical en cita, ciertamente en varios apartes de su declaración afirmó que al momento de la muerte, su padre laboraba con dicho señor, lo cual sabía porque laboraba con su padre en el mismo lugar para tal época, y porque por ese entonces había acabado de cumplir 18 años y por eso comenzó a laborar al lado de su padre poco tiempo antes del fallecimiento, no obstante, ha de precisarse que a pesar de haber indicado que eso fue

“*aproximadamente dos años*” antes del deceso, al ser inquirido por las fechas exactas manifestó que no sabía precisarlas.

Ello así, las exposiciones de CRISTIAN CAMILO SIERRA RUÍZ en modo alguno desvirtúan la confesión del demandado GUSTAVO ADOLFO PALACIO, toda vez que los artículos 25 y 26 del CST autorizan la concurrencia del contrato de trabajo con otro tipo de contratos y la coexistencia de contratos de trabajo, de modo que, el hecho de haber laborado con el señor JAIRO CORREA no desvirtúa legalmente la existencia de un contrato de trabajo con el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO, máxime si se tiene en cuenta que la declaración fue rendida más de 12 años después de los hechos, por lo que no se puede exigir en la misma la precisión de fechas y pormenores de empleadores o contratantes del causante, si se tiene en cuenta que el mismo se dedicaba al sector de la construcción, en la que es común la prestación de servicios bajo modalidades no laborales.

De suyo que, las alegaciones de la alzada por pasiva no logran desvirtuar la conclusión del *a quo*, según la cual sí se probó que existía una relación laboral entre el fallecido ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL y el señor GUSTAVO ADOFLO PALACIO desde el año 2006 al año 2008, y en este sentido habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia. Sobre este punto, subraya la Sala que el *a quo* condenó a dicho empleador a pagar a COLPENSIONES las cotizaciones de octubre de 2007 y enero y febrero de 2008 por razón de los servicios prestados por el causante; condena que no fue confutada por el demandado, debiendo abstenerse la Sala de revisarla en virtud al principio de consonancia, por lo que deberá permanecer incólume tal condena en esta instancia.

Pese a lo anterior, ha de precisarse que la relación laboral del causante con el demandado se desarrolló en dos momentos diferentes, el primero de agosto a octubre de 2005, periodo respecto del cual el empleador desafilió al causante del seguro social en pensiones para el 1º de octubre de 2005 (doc. 003 pág. 7 y 8), interregno por el cual COLPENSIONES reporta adecuadamente las semanas cotizadas por el empleador (doc. 003 pág. 50); y un segundo momento a partir del año 2006 y hasta el año 2008, de suerte que no hay duda alguna en la efectiva prestación de servicios de ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL a favor de GUSTAVO ADOLOFO PALACIO para dichos años, debiéndose determinar entonces para éste segundo momento, a partir de qué fecha GUSTAVO ADOLOFO PALACIO volvió a afiliarse en pensiones al demandante, en tanto

para este año COLPENSIONES alega que no se reporta ninguna semana cotizada, mientras que la parte actora alega que existen periodos de cotización en mora.

Conforme a lo anterior, se observa que en la Resolución GNR 277592 del 19 de julio de 2016 (doc. 003 pág. 49 y ss.), COLPENSIONES establece que inició acciones de cobro coactivo por el empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO y a favor de ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL para los ciclos de junio y agosto de 2006, en los siguientes términos: “(...) *Para los ciclos 200607 y 200608, se genera el siguiente radicado de cobro: 2016_108813110 (...)*”.

Es decir, que en dicho acto administrativo reconoce que tal empleador afilió al causante por todo el ciclo de junio de 2006, vale decir, desde el **1º de julio de 2006**, en tanto la afiliación es presupuesto *sine qua non* para iniciar las acciones de cobro coactivo, al tiempo que también reconoció la entidad que dicha afiliación perduró, cuando menos, hasta el **31 de agosto de 2006**, por cuanto que se radicó proceso de cobro coactivo por todo el periodo de agosto de 2006; y de consiguiente, habrá de concluirse que fue en el acto administrativo en cita que se estableció que el empleador GUSTAVO ADOLFO PALACIO incurrió en mora a favor de ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL desde el 1º de julio de 2006 y hasta el 31 de agosto de 2006.

En otras palabras, no hay duda en que tal empleador incurrió en mora en los aportes en pensiones del 1º de julio y el 31 de agosto de 2006, pues a más de no haber duda respecto de la relación laboral, la entidad accionada no hubiera iniciado unas acciones de cobro por tal lapso, el que corresponde a 60 días en mora, y a los que habrá de descontarse 10 días simultáneos que le fueron cotizados por el empleador JOSE ALBEIRO LONDOÑO para el mes de julio de 2006, lo que arroja un total de 50 días en mora, que equivalen a un total de **7,14 semanas** de cotización, que no son tenidas en cuenta por COLPENSIONES.

Asuntándose a este efecto que, si bien la entidad manifestó en la Resolución GNR 277592 del 19 de julio de 2016 que radicó las gestiones de cobro, no aportó prueba alguna de que efectiva y realmente hubiere llevado a feliz término las mismas, debiendo por tanto sumarse al total de 43 semanas reconocidas por la entidad pública, para un total de **50,14** semanas cotizadas por el *de cujus* al sistema general de pensiones entre el **4 de agosto de 2005** y el **3 de agosto de 2008**.

Es de relieves en este punto, que ni siquiera es necesario acudir a las planillas de aportes aportadas por el demandado GUSTAVO ADOLFO PALACIO, pues a partir de la

información suministrada en la Resolución GNR 277592 del 19 de julio de 2016 (doc. 003 pág. 49 y ss.), es dable arribar a la conclusión de que tal empleador incurrió en mora en las cotizaciones en pensiones por al menos 7,14 semanas, sin que COLPENSIONES acreditase que llevó a cabo efectivamente las condignas acciones de cobro, debiéndose confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto con acierto consideró que el afiliado fallecido acreditó la densidad mínima cotizacional para causar la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios.

De frente a la calidad de beneficiaria de la demandante de la pensión de sobrevivientes causada por su compañero permanente fallecido, basta anotar que por Resolución n.º 20887 de 2009 (doc. 003 pág. 11 y ss.) el ISS, hoy COLPENSIONES, le pagó una indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivencia, reconociendo con ello su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, de lo cual se colige que su calidad de beneficiaria ni siquiera hacía parte de la litis, por haber sido reconocida por la entidad pública demandada en sede administrativa.

El monto de la pensión corresponde al SMMLV, tal y como concluyó el *a quo*, toda vez que tal asunto no fue materia de apelación por la parte actora, y en tal medida, sólo se analiza en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, lo que impide que pueda estimarse un monto mayor en esta instancia.

Habida cuenta que la pensión se causó antes del 31 de julio de 2011 y en cuantía inferior a tres (3) SMMLV, según el Acto Legislativo 1 de 2005, debe reconocerse a la demandante sobre 14 mesadas pensionales al año.

Frente a la excepción de prescripción, conviene señalar que el demandante reclamó administrativamente la pensión de sobrevivencia el 13 de mayo de 2009 (doc. 003 pág. 11 y ss.), el 5 de mayo de 2016 (doc. 003 pág.32 y ss.) y el 14 de julio de 2016 (doc. 003 pág. 49 y ss.), precisándose que las últimas dos reclamaciones no tuvieron la virtualidad de interrumpir el término prescriptivo, dado que la prescripción del derecho en concreto solo puede interrumpirse por una sola vez, tal y como la Sala de Casación Laboral en reciente sentencia SL3023-2020.

“El ya citado artículo 151 del CPTSS refiere, en términos generales, que el simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación, debidamente determinado, interrumpe el término prescriptivo, pero solo por un lapso igual, mientras que idéntica locución hace el art. 41 del D. 3135/68.

(...) Al respecto, en la sentencia CSJ SL10415-2016, rad. 42415, esta Corte dijo:

(...) el juez plural no incurrió en ningún desatino al declarar probada la prescripción, fundamentalmente porque siguiendo las directrices del artículo 488 del C.S.T, la interrupción de dicho medio exceptivo solo puede surtirse en una sola oportunidad; de tal suerte que cuando se presentan múltiples peticiones en el mismo sentido, únicamente la primera de ellas tiene la fuerza vinculante a efecto de suspender el trienio con el que cuenta el trabajador para reclamar sus derechos, que para el caso de autos son las mesadas (...).”

Recuento fáctico del que se desprende que están prescritas las mesadas pensionales causados antes del **28 de noviembre de 2013**, vale decir, tres (3) años antes de la presentación de la demanda (doc. 002 pág. 8), conforme a los artículos 488 del C.S.T y 151 del CPTSS, y como en este punto también se revisa la sentencia de instancia en el grado jurisdiccional de consulta a favor del COLPENSIONES, se impone la modificación de la decisión del cognoscente de instancia.

Ahora, en cuanto al retroactivo objeto de condena por las mesadas causadas, el mismo debe ser actualizado con corte al 28 de febrero de 2023, dado que de conformidad con el artículo 283 del C.G.P, la condena se debe extender hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, debiéndose reconocer la suma de **\$102.722.862** como retroactivo entre dichas calendas, y ordenándose a COLPENSIONES pagar a la demandante a partir del 1º de marzo de 2023 una mesada pensional de **\$1.160.000** sobre 14 mesadas pensionales, la cual se reajustará anualmente conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2013	1,94%	2,1	\$ 589.500	\$ 1.237.950
2014	3,66%	14	\$ 616.000	\$ 8.624.000
2015	6,77%	14	\$ 644.350	\$ 9.020.900
2016	5,75%	14	\$ 689.454	\$ 9.652.356
2017	4,09%	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	3,18%	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	3,80%	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	1,61%	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	5,62%	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13,12%	14	\$ 1.000.000	\$ 14.000.000
2023		2	\$ 1.160.000	\$ 2.320.000
			TOTAL	\$ 102.722.862

De igual modo, esta Sala estima que debe autorizarse a COLPENSIONES a que descuenta del retroactivo pensional causado y de las mesadas que se sigan causando hasta el momento del pago, las cotizaciones que por mandato legal deben hacerse para el sistema de seguridad social en salud, de conformidad con los lineamientos trazados sobre la materia por Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral.

De igual modo, habrá de confirmarse la autorización a COLPENSIONES para descontar del retroactivo por pagar, lo cancelado a la demandante por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes, sumas que deberá indexar al momento del pago del retroactivo, al no haber sido punto de apelación por la parte actora.

2.2.4. Intereses moratorios

Derecho consagrado en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y que se causa a partir del vencimiento del plazo máximo de 4 meses contados desde el momento en que se deprecia el reconocimiento pensional en sede administrativa, sin pasar por alto los predicamentos del máximo tribunal de esta jurisdicción, en tanto en cuanto, *“de forma excepcionalísima y particular, esta Corporación ha estimado que la imposición de los intereses moratorios no opera cuando la decisión de negar la pensión tiene un respaldo normativo o porque proviene de la aplicación minuciosa de ley”* (CSJ SL787-2013), excepción que se presenta en el *sub lite*, en la medida en que en la sentencia de primera instancia del 11 de noviembre de 2010 y en la de segunda instancia 30 de abril de 2013, dentro del proceso con el radicado único nacional 05001-31-05-002-2010-00398-00, ya se había indicado que COLPENSIONES había actuado conforme a derecho al denegar la prestación económica en comento, siendo necesaria la declaración de la relación laboral entre el fallecido ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL y el señor GUSTAVO ADOLFO PALACIO en el *decisum* de esta sentencia judicial, a fin de proceder a reconocer los periodos en mora alegados y así concederse la pensión pretensa, siendo que los documentos aportados con las reclamaciones administrativas del 5 de mayo de 2016 (doc. 003 pág.32 y ss.) y el 14 de julio de 2016 (doc. 003 pág. 49 y ss.) no probaban en forma alguna la afiliación en pensiones del causante por parte de su empleado, en tanto referían exclusivamente a los aportes a los subsistemas en salud y de riesgos laborales, habiéndose de confirmar la sentencia de primera instancia en este ítem.

2.3. COSTAS

Costas en segunda instancia, a cargo de ÁNGELA PATRICIA RUÍZ, por habersele resuelto desfavorablemente los recursos de apelación propuestos, y a favor de COLPENSIONES, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 365 del CGP, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000, equivalente a un (1) SMMLV.

Sin costas en segunda instancia a cargo de COLPENSIONES, dado que, si bien es cierto que interpuso el recurso de apelación, también lo es que la sentencia se analizó igualmente en el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

Las de primera instancia se confirman, toda vez que COLPENSIONES se opuso a las pretensiones de la demanda, propuso excepciones de mérito, y fue vencida en el juicio, mientras que el demandado GUSTAVO ADOLFO PALACIO no apeló la condena en costas.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales TERCERO y SEXTO de la sentencia materia de apelación y consulta, proferida el 10 de septiembre de 2020 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, los cuales quedarán en los siguientes términos:

*“**TERCERO:** CONDENAR a COLPENSIONES a reconocer y pagar a la señora ÁNGELA PATRICIA RUÍZ la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de ORLANDO DE JESÚS SIERRA MURIEL, adeudándole un retroactivo de **\$102.722.862** por las mesadas causadas entre el 28 de noviembre de 2013 y el 28 de febrero de 2023. A partir del 1º de marzo de 2023 deberá continuar pagándole una mesada pensional de **\$1.160.000** sobre 14 mesadas pensionales, la cual se reajustará anualmente conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
(...)*

***SEXTO:** DECLARAR parcialmente probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, respecto de las mesadas causadas con antelación al 28 de noviembre de 2013.”*

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia que se estudia en apelación y en consulta.


TERCERO: COSTAS en segunda instancia a cargo de ÁNGELA PATRICIA RUÍZ y a favor de COLPENSIONES, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.160.000. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, siguiendo los predicamentos de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertidos en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


Cópiese, comuníquese y cúmplase.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



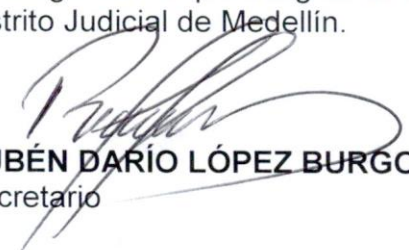
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario